

Las elecciones de 2009 y sus repercusiones para la democracia en México

*Roberto Gutiérrez López**

RESUMEN

Este artículo presenta un análisis de los resultados de los comicios federales del 2009, haciendo énfasis en la nueva distribución del Poder Legislativo y su impacto en la dinámica general del sistema político. Se establecen las principales causas de la recomposición de fuerzas entre los tres principales partidos y lo que ello puede implicar de cara tanto a las elecciones federales de 2012 como, en un plano más general, al tipo de agenda política legislativa que habrá de procesarse en la segunda mitad del actual sexenio.

PALABRAS CLAVE: democracia, elecciones, partidos políticos, Poder Legislativo.

ABSTRACT

This article presents an analysis of federal election results of 2009, the new emphasis on sharing legislative power and its impact on the overall dynamic of the political system. It sets out the main causes of the recomposition of forces between the three main parties and what that may involve both face federal elections of 2012, on a broader level, the type of legislative political agenda to be processed in the second half of the current administration.

KEYWORDS: democracy, elections, political parties, legislature.

Las pasadas elecciones legislativas, junto con algunos procesos electorales en el plano estatal y municipal, marcaron un punto de quiebre en la administración del presidente Felipe Calderón. Como se comentó con insistencia, estos comicios representaban una difícil prueba para su gobierno. De hecho, para sectores importantes de la opinión pública serían un suceso clave para medir el grado de apoyo

* Profesor-investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

VEREDAS 20 • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO • 2010 • PÁGINAS 121-128

o de rechazo a las políticas instrumentadas durante los últimos tres años, así como para establecer la correlación de fuerzas entre los partidos de cara a la elección presidencial de 2012.

A la vista de los resultados, se confirma que en México los llamados gobiernos divididos (Lujambio, 2000; Varela, 2004), que iniciaron en 1997 cuando por primera vez el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, llegaron para quedarse. Es decir, que muy difícilmente podrá repetirse una situación donde el partido del presidente controle al mismo tiempo la mayoría legislativa.

Esta falta de dominancia política del partido del presidente en la Cámara de Diputados se ve agravada, a la luz de los resultados de julio pasado, por el hecho de que en esa Cámara existirá una coalición opositora que cuenta con la mayoría absoluta de los escaños. En efecto, la alta votación obtenida por el PRI y la alianza entre éste y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha producido una situación inédita en la historia política del país. Por primera ocasión, el presidente de la República no sólo no cuenta con la mayoría en la Cámara baja, sino que enfrenta a una fuerza política cohesionada con capacidad tanto de bloqueo de las iniciativas del Ejecutivo como de aprobación de leyes y toma de decisiones por cuenta propia. Se puede constatar claramente lo anterior, cuando se hace el recuento de la votación obtenida por cada partido, así como su traducción en curules, tanto de mayoría como de representación proporcional:

<i>Partido</i>	<i>Porcentaje de votación</i>	<i>No. de diputados de mayoría relativa</i>	<i>No. de diputados de representación proporcional</i>	<i>Total de curules</i>
PAN	28.01	70	73	143
PRI	36.94	184	53	237
PRD	12.19	39	32	71
PVEM	6.70	4	18	22
PT	3.65	3	10	13
Convergencia	2.46	0	6	6
Nueva Alianza	3.42	0	8	8
PSD*	1.03	0	0	0

FUENTE: Instituto Federal Electoral.

* Pérdida del registro.

De esta nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados se pueden hacer diversas lecturas. La primera y más evidente es que el ejercicio gubernamental de los últimos tres años no ha sido satisfactorio para franjas significativas de la población. La baja votación panista indica que problemas fundamentales como el desempleo, la carestía y la inseguridad no fueron adecuadamente tratados por las políticas públicas de la administración del presidente de la República, generando un fuerte reclamo ciudadano al respecto.¹ Ciertamente, el PAN se manejó en la coyuntura electoral suponiendo erróneamente que la popularidad personal de Calderón se trasladaría automáticamente al partido, cuando distintos estudios previos indicaban lo contrario. También equivocadamente, el panismo planteó como eje de su estrategia la crítica al PRI por su historia de autoritarismo y corrupción, creyendo además que la apología de la lucha contra el narcotráfico sería decisiva para inclinar la balanza a su favor.

Sin embargo, resultó evidente que los graves efectos negativos de la crisis económica y de un tipo de violencia cotidiana no atribuible solamente al gran crimen organizado, sino a los deficientes esquemas de seguridad pública y procuración de justicia, jugaron en contra de un proyecto gubernamental que había hecho de la creación de empleos, la recuperación salarial y la seguridad de las familias su bandera fundamental. La estrategia de “guerra sucia” contra el PRI que tan buenos resultados le había dado en la competencia con López Obrador, fue totalmente inadecuada en un tipo de elección diversificada en 300 distritos electorales, en los que era imposible personalizar y donde los factores locales desempeñaban un papel fundamental.²

¹ Se ha comentado, y con razón, que el descontento ciudadano se expresó en estas elecciones no solamente a partir del voto de castigo al PAN, sino que se dejó ver tanto en el porcentaje de abstencionismo general como en la emisión del llamado “voto nulo”, ampliamente promovido por numerosas asociaciones civiles. El malestar con el conjunto de la clase política y sus diversos partidos se tradujo, efectivamente, en más del 55% de abstención y en 5.4% de anulación del voto a nivel nacional. Esta última cifra es especialmente significativa por el hecho de que supera la votación del partido Nueva Alianza (3.41%), el partido Convergencia (2.36%), el Partido del Trabajo (3.56%) y el Partido Social Demócrata, que perdió su registro al obtener sólo el 1.03%.

² Si en México no tuviéramos un sistema electoral que combina los principios de mayoría y de representación proporcional, el PRI, al ganar en 184 distritos de los 300 en competencia hubiera tenido, él solo, una mayoría más que holgada en la Cámara de Diputados.

Como ha sido reconocido, el derrumbe electoral del panismo fue monumental, sobre todo si se compara con lo ocurrido en la elección de 2006 (Reveles, 2007; Peschard, 2007). No sólo perdió 63 de los 206 diputados que tenía, quedando en 143, sino que a nivel estatal tampoco tuvo un desempeño siquiera aceptable. De las seis gubernaturas en juego únicamente ganó la de Sonora,³ perdiendo bastiones tradicionales como Querétaro y San Luis Potosí y, a nivel municipal, localidades tan importantes como Naucalpan y Tlanepantla del corredor industrial del Estado de México.

Por su parte, y como la otra cara de la moneda, el avance del PRI resultó avasallador. Al pasar de 106 diputados en 2006 a 237 en 2009 (lo que representa un incremento del 106% en un periodo relativamente corto), se convirtió en la principal fuerza política de esa Cámara y, en buena medida, del país. En efecto, gracias a sus triunfos en las entidades federativas, el PRI controla ahora 20 de las 32 gubernaturas estatales, ya que además de los triunfos mencionados en Querétaro y San Luis Potosí, conservó Campeche, Nuevo León y Colima. Si a ello se suman sus importantes victorias en el nivel municipal,⁴ se podrá comprender porqué el poder regional y nacional del PRI le proporciona una plataforma sumamente poderosa para aspirar a reconquistar la Presidencia de la República en 2012.⁵

No obstante, la estrategia política a partir de la cual el PRI buscará conseguir este objetivo no está aún completamente definida y no es posible anticipar ni garantizar ningún resultado. En este sentido, debe recordarse que en las elecciones intermedias de 2003, dicho partido consiguió también triunfos de primera importancia, que en su momento hicieron pensar en que se perfilaba ya como el partido

³ Lo que además no fue atribuible a méritos propios sino al malestar social generado por la tragedia del incendio de una guardería pública en la que murieron decenas de niños y que el gobernador priísta no logró manejar adecuadamente.

⁴ De los 550 municipios en disputa, el PRI conquistó 284 (51.9%), el PAN 204 (37.2%) y PRD 27 (4.93%); los demás se repartieron entre los partidos restantes. Fuente: Elaboración propia con datos de consejos electorales estatales.

⁵ En este contexto es oportuno mencionar, también, el posicionamiento y popularidad alcanzados por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Este fenómeno es básicamente atribuible al enorme gasto que ha hecho en promover su imagen a través de las televisoras, lo cual ha colocado en la mesa de discusión la necesidad de regular, una vez más, el papel de los medios de comunicación en la competencia político electoral.

triunfador en las elecciones presidenciales del 2006 (Reyes, 2007). El siguiente cuadro permite hacer una comparación interesante entre la situación de la Cámara en 2003 y la actual de 2009.

<i>Partido</i>	<i>No. de curules en 2003</i>	<i>% en 2003</i>	<i>No. de curules en 2009</i>	<i>% en 2009</i>
PAN	224	44.80%	237	47.40%
PRI	150	30%	143	28.60%
PRD	97	19.40%	71	14.20%

FUENTE: datos oficiales Cámara de Diputados.

Como podrá observarse, el panorama en 2003, en este rubro, no era tan diferente al que se generó en este 2009. Ahora se sabe, sin embargo, que la historia desmintió radicalmente los pronósticos hechos en 2003 y que la competencia por la Presidencia no involucró ni lejanamente al Partido Revolucionario Institucional. Sus divisiones internas, marcadamente en el espacio legislativo, y el perfil de un candidato presidencial sumamente objetable jugaron en contra de sus aspiraciones.

De aquí que la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, y en general en todo el país, deba ser tomada con alguna reserva en lo que respecta a los pronósticos sobre el 2012. En buena medida, las probabilidades de éxito priísta se jugarán en la manera en que logren cohesionarse internamente y establezcan una agenda legislativa que beneficie políticamente a quien haya de ser su candidato. En este plano, serán cruciales sus alianzas internas –por ahora la negociación sobre la coordinación del grupo parlamentario a cargo de Francisco Rojas y la permanencia de Beatriz Paredes en la presidencia nacional del partido parece haberlos estabilizado–, así como sus actitudes y pronunciamientos de cara a una serie de temas que resultan fundamentales para el futuro del país.

En efecto, en un contexto marcado por dificultades económicas, la pérdida de plazas laborales, el agotamiento de los recursos naturales, el desgaste del sistema político, el fortalecimiento del crimen organizado y de los poderes fácticos (empresarios, iglesia, corporaciones sindicales, medios de comunicación), las fuerzas políticas

tendrían que estar obligadas a presentar y a desahogar un conjunto de reformas estructurales que se han venido aplazando desde hace mucho tiempo.

Reformas como la fiscal (que amplíe la base de contribuyentes e incremente los recursos fiscales del Estado); la energética (que permita explorar y explotar de mejor manera los recursos energéticos del país, incluidos los acuíferos); la laboral (que establezca nuevos modelos de relación obrero-patronal y que sin demérito de los derechos de los trabajadores permita una mayor productividad de las empresas); la político-electoral (que se haga cargo de la crisis del presidencialismo mexicano y que abra temas vedados como la reelección de legisladores y presidentes municipales), así como una reforma al sistema de justicia que busque reducir los impresionantes márgenes de impunidad y corrupción que hoy marcan su funcionamiento, son todas reformas que no pueden seguirse postergando sin intensificar el malestar social y poner en riesgo la viabilidad del país.

Por supuesto, arribar a acuerdos nacionales en torno a éstos y otros temas de gran relevancia, implica una disposición deliberativa y negociadora que coloque en un segundo plano el cálculo pragmático de la rentabilidad política derivada de ellos. Es aquí donde resultará crucial el tipo de estrategia a seguir por parte del priísmo y las prioridades que establezca. Puede, en efecto, arriesgar a una serie de reformas de fondo, absorbiendo los costos para algunas de sus clientelas e intereses tradicionales, o bien optar por arreglos cosméticos que mantengan inercialmente el *status quo* sin grandes turbulencias políticas, en una suerte de cogobierno de bajo perfil con el presidente Calderón y su partido.

Algunas opiniones señalan que el PRI, incluso por cuestiones de cálculo, estaría interesado en dejar sentadas nuevas bases estructurales para el desarrollo del país a fin de recibir la Presidencia en 2012 en condiciones menos lamentables que las actuales y con un mayor margen de operación en distintos frentes. Otras, sin embargo, argumentan que este partido utilizará su fuerza únicamente como poder de bloqueo legislativo a fin de desacreditar en mayor medida las fallidas políticas públicas de la administración panista. Sólo el tiempo podrá dar cuenta del tipo de ruta elegida, aunque la posición crítica del priísmo frente a la reforma política planteada por el titular del Ejecutivo parece abonar a favor de esta segunda opción.

En este escenario, la posición de la izquierda mexicana también debe ser considerada. Como hemos visto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sufrió una caída muy importante de su votación si se le compara con la que obtuvo en 2006 (Palma y Balderas, 2007; Prud 2007). A ello han contribuido tanto el comportamiento poselectoral de quien fuera su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, como las cada vez más grandes pugnas internas entre sus diversas corrientes. Incluso en el Distrito Federal, su bastión más importante, el PRD ha experimentado un decrecimiento significativo de su base electoral. Ciertamente ha conservado la mayor parte de las delegaciones (12 de 16), pero lo ha hecho con porcentajes cada vez menores de votación y con una Asamblea Legislativa cada vez menos hegemónica.⁶

A futuro, la izquierda mexicana no parece tener un horizonte halagador. En el 2012, y a pesar de sus esfuerzos “refundacionales”, seguramente se recrudecerá la pugna entre sus corrientes y difícilmente llegarán a un acuerdo en torno a su candidatura presidencial. Hasta ahora no se ve cómo Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard, a las que tentativamente habría que sumar la de Carlos Navarrete, renuncien a sus ya declaradas aspiraciones presidenciales y se logre, como en el 2006, una candidatura cohesionadora y atractiva socialmente.

De cara a este panorama poselectoral, el papel que habrán de desempeñar tanto la opinión pública como distintos sectores sociales no organizados a partir de los partidos tendrá una gran importancia. Evitar que las fuerzas políticas se concentren exclusivamente en estrategias y negociaciones pragmáticas, como la ocurrida recientemente entre PRI y PAN a propósito de un nombramiento tan importante como el de la Procuraduría General de la República, y que atiendan los temas de importancia real para la ciudadanía y para el fortalecimiento de las estructuras institucionales y las políticas públicas que el país necesitará para los próximos años, es hoy una tarea crucial que debe ser asumida colectivamente.

Con independencia del partido que triunfe en 2012, hoy la realidad del país demanda de un enorme esfuerzo de análisis, negocia-

⁶ En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el PRD obtuvo 42% de los Diputados, el PAN 21%, el PRI 12% y el PT –impulsado por la corriente lópez-obradorista– 9 por ciento.

ción y propuesta en los distintos niveles y órdenes de gobierno. El desprestigio de las élites, la degradación de la vida pública (Raphael, 2007) y la convivencia colectiva, la pérdida de competitividad del país, la caída en no pocos de los indicadores de la eficacia gubernativa y, sobre todo, la pérdida de confianza en el futuro de amplios sectores de la población, exigen que la nueva correlación de fuerzas políticas derive en acuerdos sustantivos capaces de mejorar la calidad de la democracia mexicana y sus rendimientos sociales.

BIBLIOGRAFÍA

- Lujambio, Alonso (2000), *El poder compartido: un ensayo sobre la democracia mexicana*, Cal y Arena, México.
- Palma, Esperanza y Balderas, Rita (2007), "Evaluación del PRD después de la alternancia de 2000", en Roberto Gutiérrez, Alberto Escamilla y Luis Reyes (coords.), *México 2006: implicaciones y efectos de la disputa del poder político*, UAM-Azcapotzalco, México.
- Peschard, Jacqueline (2007), "El perfil del voto en 2006. Del voto útil al voto diferenciado", en Jacqueline Peschard (coord.), *2 de julio, reflexiones y alternativas*, UNAM, México.
- Prud Homme, Jean François (2007), "La recomposición del sistema de partidos después de las elecciones de 2006", en Jacqueline Peschard (coord.), *2 de julio, reflexiones y alternativas*, UNAM, México.
- Raphael, Ricardo (2007), "Dilemas de una ciudadanía aplazada", en Jacqueline Peschard (coord.), *2 de julio, reflexiones y alternativas*, UNAM, México.
- Revels, Francisco (2007), "El PAN en la elección presidencial de 2006: candidatos, propuestas y resultados", en Roberto Gutiérrez, Alberto Escamilla y Luis Reyes (coords.), *México 2006: implicaciones y efectos de la disputa del poder político*, UAM-Azcapotzalco, México.
- Varela, Helena (2004), "Diseño institucional y consolidación democrática: propuestas de reforma para una mejor relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo", en *La Agenda Electoral de la Consolidación Democrática*, UIA-Senado de la República, México.